

RUMANÍA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Situación política

Los principales asuntos que han ocupado el panorama político rumano en febrero, segundo mes de Presidencia de turno rumana de la Unión Europea, han seguido siendo el largo camino para la aprobación de la Ley de Presupuestos y la interminable reforma de las leyes de Justicia, así como las polémicas entorno a la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y la candidatura de su ex fiscal Jefa para el Cargo de Jefa de la futura Fiscalía europea.

También cabe señalar el nombramiento de los nuevos Ministros de Desarrollo Regional y Administración Pública y de Transportes, cargos que habían quedado vacantes desde que el Jefe de Estado, Klaus Iohannis se negara a aceptar las propuestas hechas por la Primera Ministra en el ajuste de Gobierno de noviembre.

Por fin, el 21 de febrero el presidente Iohannis firmó los decretos para el nombramiento de Vasile-Daniel Suciú, propuesto como vice primer ministro y ministro de Desarrollo Regional y Administración Pública, y Alexandru-Răzvan Cuc, propuesto para el Ministerio de Transportes. La primera ministra Viorica Dăncilă ha precisado que ha hecho estas propuestas para poner fin a la situación de bloqueo de la actividad del Gobierno, especialmente porque vence el plazo para el período interino en los dos Ministerios. «El desarrollo regional y los transportes son dos sectores clave, para los cuales hemos proporcionado, a través de la Ley de Presupuesto Estatal, fondos suficientes para realizar las inversiones que Rumanía necesita. Para la buena aplicación de los proyectos de inversión es necesaria la coordinación por parte de ministros con atribuciones completas en el ejercicio de sus funciones», ha declarado la primera ministra. Anteriormente, Olguța Vasilescu y Mircea Drăghici habían sido propuestos para los dos Ministerios. Pero fueron rechazados en reiteradas ocasiones por Klaus Iohannis, y finalmente decidieron renunciar a sus candidaturas.

EL largo camino de la ley de presupuesto para 2019 no ha visto la solución de una aprobación definitiva a lo largo de febrero, después de su aprobación en Consejo de Ministros a primeros de mes. El borrador prevé incrementos importantes de fondos destinados a las inversiones, la Sanidad y la Educación. Un 2% del PIB se asignará a la Defensa, conforme con los compromisos asumidos con la OTAN, y se seguirán asignando los montos necesarios para una nueva alza de pensiones y salarios en el sistema público. Una cantidad importante

de dinero será destinada a los presupuestos locales. Mientras que los ingresos representan un 33,4% del PIB se estima que la mayor cantidad de dinero se recaudará de las aportaciones al seguro social. El IVA, los impuestos y los impuestos especiales, así como los gastos representan el 35,9%.

La oposición política de derecha ha criticado a la coalición de Gobierno por haber retrasado la elaboración del presupuesto. Este ha sido elaborado sobre la base de un PIB que supera por primera vez los 212.000 millones de euros en el contexto de un aumento económico de un 5,5%, una inflación promedia anual del 2,8% y un déficit presupuestario estimado a un 2,55%.

En la segunda mitad de febrero, el Parlamento dio su visto bueno al proyecto, pero el Presidente Klaus Iohannis, considerando que se ha realizado «de manera apresurada y se basa en unas estimaciones económicas no realistas» no ha promulgado la Ley, remitiéndola al Tribunal Constitucional. Iohannis ha declarado que el presupuesto elaborado por la coalición PSD-ALDE pone en peligro la economía rumana y tiene aspectos claros de inconstitucionalidad, que impiden que Rumanía cumpla con sus obligaciones como miembro de la UE. Ha tachado el presupuesto aprobado de poco realista, sobrevaluado y demorado, ya que según la ley debía llegar al Parlamento el 15 de noviembre de 2018. Según el presidente, es ridículo caracterizar el presupuesto para 2019 como un presupuesto destinado a las inversiones, según ha dicho la primera ministra Viorica Dăncilă, ya que las cifras indican que es un presupuesto más bien austero, con financiación de subsistencia, con cero inversión en ciertas áreas, con la necesidad de reorganizaciones e incluso despidos causados por la falta de fondos para los gastos actuales. El presidente ha acusado al Gobierno de no tener el dinero para invertir, pero, según ha dicho, aun así se han asignado fondos importantes para los partidos, principalmente para el PSD, el número uno en la coalición.

En, cuanto al tema de la Justicia, el Ministro competente, Tudorel Toader, ha promovido, mediante ordenanza de urgencia, una serie de modificaciones de las leyes que entre otras cosas se refieren al nombramiento de los fiscales de alto rango, y apuntan hacia las atribuciones del jefe del departamento de investigaciones. Toader ha explicado que los posibles candidatos a los cargos de alto rango podrán proceder también de las filas de exjueces y que las personas que ocupan en el presente estos cargos mediante delegación de poderes seguirán en el cargo durante 45 días.

El Consejo Superior de Magistratura a través de la sección destinada a los fiscales ha advertido acerca de que los cambios de las leyes de Justicia operados por el Gobierno podrán afectar gravemente la actividad de las Fiscalías.

También la Comisión Europea ha reaccionado a través de su portavoz, Margaritis Schinas, que ha afirmado que el Ejecutivo comunitario sigue con mucha preocupación las últimas evoluciones relacionadas con el Estado de derecho de Rumanía, tanto en lo referente al contenido como al procedimiento de los últimos cambios con ayuda de las ordenanzas de urgencia, sin consultar con representantes de la justicia y con las personas directamente interesadas. Parece que estos cambios contravienen directamente las recomendaciones formuladas en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, que son defendidas por todos los Estados miembros.

Los principales partidos de oposición, el PNL y la Unión Salvad Rumanía, han presentado ante la Cámara de los Diputados una moción sencilla contra dichas ordenanzas.

Por su parte, los magistrados han salido a la calle para protestar, ya que creen que dichas modificaciones afectan gravemente la independencia del sistema judicial. Se ha tratado de una serie de protestas sin antecedentes en Rumanía, con suspensión de la actividad en varios tribunales. También la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) ha decidido por primera vez suspender su actividad del 26 de febrero al 8 de marzo, solucionando solamente las urgencias. Como protesta, los jueces del Tribunal de Bucarest han decidido suspender también su actividad hasta el 7 de marzo. Todos los casos analizados, excepto los casos urgentes serán aplazados. Los magistrados piden la derogación de la Ordenanza 7 y medidas para suspender la actividad del Departamento de Investigación de los Delitos en la Justicia hasta la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre las apelaciones respecto a este departamento especial.

A raíz de ello, Toader, ha anunciado que ha elaborado una nueva ordenanza de urgencia que abrogará varias normas de la Ordenanza que ha causado la ola de protestas. Las modificaciones están relacionadas con la suspensión del artículo que prevé que los jueces, junto con los fiscales, se pueden convertir en fiscales de alto nivel.

Klaus Iohannis ha solicitado al Departamento de investigación de delitos judiciales que se aclare rápidamente la situación en el caso de la ex fiscal jefa de la DNA, Laura Codruța Kovesi, quien ha sido citada a declarar como sospechosa de abuso de poder, aceptación de sobornos y perjurio. Kovesi se declara inocente y afirma que no es una coincidencia que las acusaciones lleguen cuando se ha presentado su candidatura para el cargo de fiscal jefa europea.

Kovesi, ha obtenido el mayor número de votos después de haber comparecido ante la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del

legislativo comunitario para ocupar el cargo de fiscal jefa de la futura Fiscalía Europea. Anteriormente, había obtenido el mismo resultado en la Comisión de Control Presupuestario (CONT).

En Bucarest, la oposición parlamentaria de derecha ha manifestado su agrado por las destacadas victorias de la exjefa de la DNA y ha criticado la coalición formada por el PSD y la ALDE, que está en el poder, afirmando que "ha traicionado a Rumanía" y "ha orquestado una campaña de denigración" contra la candidata rumana.

El futuro fiscal jefe de la Fiscalía Europea será nombrado después de las negociaciones que tendrán lugar entre el Legislativo comunitario y el Consejo de los Estados miembros.

Situación económica

El avance de la economía rumana bajó en 2018 al 4,1%, del 7% registrado el año anterior, según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Los datos muestran un crecimiento del PIB inferior a las estimaciones de la Comisión Nacional de Pronóstico, que indicaban un avance del 4,5% para la economía rumana en 2018. La Comisión Europea ha mostrado recientemente en las previsiones económicas de invierno que el auge económico que comenzó en Rumanía en el año 2017 se moderó en 2018.

La Comisión Europea, en el Informe semestral sobre cada país miembro ha advertido que la economía de Rumanía se enfrenta a unos altos riesgos. En el documento, el Ejecutivo comunitario ha mencionado, entre otros temas, que la Ordenanza de Urgencia 114 del Gobierno, pero también una ley aprobada en el Parlamento que limita de manera retroactiva los tipos de interés para los préstamos hipotecarios, corre el riesgo de amenazar el funcionamiento normal del sector financiero. El informe de la Comisión Europea muestra también que las medidas de la Ordenanza de Urgencia 114 debilitan fuertemente el Pilar II de pensiones privadas. Los especialistas de la UE han afirmado que las medidas tienen efectos negativos en las futuras pensiones de los rumanos, en el mercado de capital, y afectarán a las próximas inversiones, aumentarán las incertidumbres, haciendo que la economía de Rumanía sea menos atractiva tanto para los inversores rumanos como para los extranjeros. Los riesgos contra la economía rumana se deben también al crecimiento del déficit de cuenta corriente, pero también al aumento del coste de mano de obra tras el crecimiento del salario mínimo por economía y los salarios de los empleados en el sistema público. La Comisión Europea también ha llamado la atención sobre los débiles resultados registrados en los sectores de la educación y la investigación. En su análisis, el Ejecutivo comunitario ha destacado la necesidad de

promover las inversiones, de tener políticas fiscales y presupuestarias responsables y de poner en marcha unas reformas bien creadas.

Seguridad social

Número de pensionistas y pensión media. Datos trimestrales.-

En el cuarto trimestre de 2018, el número medio de los pensionistas era 5.197.000, es decir 4.000 menos que en el trimestre anterior.

La prestación media mensual en el cuarto trimestre de 2018 ha sido de 1.223 leus (unos 257 euros), sin variaciones respecto al trimestre anterior. El número de pensionistas que cobran la prestación de vejez ordinaria representa el 77% del total, mientras que un 2,1% cobra jubilación anticipada o jubilación anticipada parcial.

NÚMERO MEDIO DE PENSIONISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN MEDIA MENSUAL POR CATEGORÍA DE PENSIÓN

	Número medio de pensionistas (en miles de personas)			Pensión media (euros al mes)		
	IV -17	III -18	IV - 18	IV -17	III -18	IV - 18
Vejez	3.988	3.992	3.999	268,49	289,30	289,30
Jubil. anticipada	22	20	21	268,70	297,71	299,19
Jub. anticipada parcial	84	89	90	190,28	228,54	231,49
Invalidez	574	545	536	135,82	140,24	138,55
Supervivientes	563	552	549	131,41	141,50	141,50
Total	5.226	5.198	5.195	238,00	256,93	257,14

Fuente: INS – Institutul National de Statistica –